

ARGENTINA: ENTRE LA DEMOCRACIA Y EL ESPERPENTO

I. Elecciones: crónica interpretada

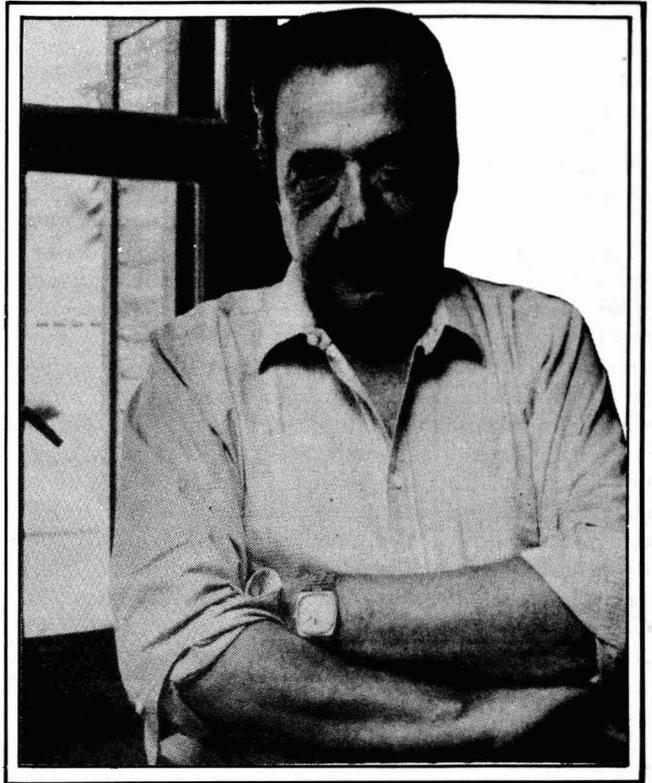
Quien "perderá esta elección será la línea autoritaria del Partido Justicialista (...), que ha orientado una campaña que está reñida con los procedimientos de la democracia (...) Es la línea que no ha entendido la revalorización de la democracia. Su prédica es insincera y calumniosa y apela a metodologías de agresión. Hacen un análisis de la realidad absolutamente falso. Están hablándole a un país que ya no existe. Le hablan a fantasmas". Así decía Raúl Alfonsín, por entonces candidato a presidente argentino de la Unión Cívica Radical, en una entrevista con el diario *Clarín* de Buenos Aires, el 28 de octubre de 1983. Y poco más de 48 horas después, en la medianoche del día 30, esas palabras que contienen un pasional diagnóstico preelectoral y a las que ningún observador daba auténtico crédito de certeza, cobrarían el carácter de proféticas. El radicalismo, contra todos los pronósticos, había concretado una hazaña política: acumulando el 52% de los votos, contra el 40% del aspirante peronista Italo Luder, por primera vez en cuarenta años le infligía una dura derrota electoral a la hasta entonces invicta maquinaria fundada por Juan Domingo Perón en 1946. Incluso en los bastiones del voto peronista, el cinturón industrial que rodea a la capital federal, las zonas de mayor concentración proletaria del país, el radicalismo hizo una buena elección o emparejó a veces los guarismos, al punto de que impuso sus candidatos para gobernador y presidente en la provincia de Buenos Aires, allí donde sus adversarios confiaban en garantizar y consolidar otro éxito nacional, como en el pasado. Se esperaba un repunte electoral de la UCR, un nuevo equilibrio que reflejara el auge del liderazgo alfonsinista sobre este viejo partido; se esperaba quizás una derrota suya por escaso porcentaje, pero nadie previó el resultado definitivo. Fue una victoria aplastante, a la que Alfonsín ambicionaba sin duda, mas que ni él habría soñado en esos términos exactos. Nació así un motivo de perplejidad teórica que deja por lo menos dos interrogantes: ¿por qué ocurrió este fenómeno?, ¿qué sentidos connota el voto para los radicales en la Argentina de hoy?

Ante todo, una breve especulación numérica. El radicalismo obtuvo el 30 de octubre, en la elección para presidente, 7.659,530 votos, o sea el 52%, y en los comicios de 1973, llevando como candidato a Ricardo Balbín contra Héctor Cámpora y el mismo Perón, logró una cifra oscilante entre 2 millones y medio a 2 millones 900 mil votos, el 24%. En tanto que el justicialismo, que con Perón en septiembre de 1973, durante la elección más copiosa de su historia, consiguiera 7 millones 350 mil sufragios aproximadamente, el 62%, esta vez conquistó 5.936,556 votos, el 40%. Al mismo tiempo, si en 1973 había una fuerza de derecha liberal cuyo líder era

Francisco Manrique, que lograba entre un millón 400 mil y un millón 700 mil votos, franja a la que se sumaron los casi 350 mil votos de la Alianza Republicana Federal del brigadier Ezequiel Martínez, vemos que en 1983 esta corriente de opinión desaparece del mapa electoral, mientras que la candidatura izquierdista de Oscar Alende, con algo más de 300 mil sufragios, a duras penas llegó el 2% del total. En una palabra, la realidad de 1983 señaló: espectacular incremento del radicalismo; sensible decremento justicialista, pese a que su 40% establece en definitiva un tope sólido y respetable; y un fenómeno de polarización entre estas dos fuerzas, que redujo a una mínima expresión en las urnas a las que se propusieran como terceras opciones: Oscar Alende, el desarrollismo de Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, y el ya citado manriquismo. Un rudimentario y un poco conjetural corte sociológico de este comportamiento electoral del pueblo argentino nos llevaría a las siguientes conclusiones: si en 1973 Cámpora y Perón fueron votados por la clase obrera y los sectores populares clásicamente peronistas, concitaban además, en el marco de una estructura frentista como el FREJULI, el apoyo del desarrollismo de Frondizi y Frigerio y de la democracia cristiana, dos fuerzas políticas por esa época todavía apreciables desde el punto de vista electoral, y asimismo contaban con el respaldo de las capas urbanas juveniles e intelectuales, o sea de los sectores de clase media ilustrada; mientras que el radicalismo se mantuvo sobre sus bases sociales tradicionales: la burguesía agraria y la burguesía y pequeña burguesía urbana más conservadora. Diez años más tarde, el panorama fue otro: es claro que ahora la UCR, con el liderazgo alfonsinista, acumuló una combinación sorprendente: a su base social habitual se unieron, por una parte, las capas medias urbanas y la juventud, además de ciertos núcleos intelectuales, y por otra parte también la votaron los sectores de derecha liberal que dejaron de visualizar una opción propia, e incluso, como lo demuestra el repunte radical en las concentraciones obreras del Gran Buenos Aires y Córdoba, algunas franjas del proletariado. El peronismo, mientras tanto, dejó de ser alternativa para los sectores medios y fue constreñido a su base social más irreductible y consecuente: las capas trabajadoras en general, pero sobre todo los núcleos más pobres de la sociedad y, presumiblemente, el gran arsenal de desocupados y marginados a partir de la política antipopular de estos últimos años.

¿Qué razones explican el anterior juego de desplazamientos? Un vértice del análisis tiene que centrarse, sin duda, en las condiciones sobre las que arribó el Partido Justicialista al acto electoral. En primer término, hay que decir que muerto Perón y con Isabel Perón detentando el puesto formal de dirección, como presidenta del partido, pero a la vez permaneciendo en los hechos en España, refugiada en el silencio e in-

fluyendo mediante un barroco sistema de señales delegadas, el peronismo no pudo construir en el proceso anterior a los comicios un liderazgo válido para el conjunto de dicha fuerza política. Así, dentro de un marco de fragmentaciones y complicadas disputas, se destacaron tres corrientes fundamentales: la llamada verticalista, que propone el liderazgo irrestricto de Isabel Perón, depositaria simbólica —para este caso— del don conductor del gran líder muerto, y cuyos contenidos políticos e ideológicos responden a la clásica vertiente autoritaria, nacionalista y facistoide del peronismo, en cuyo seno se desarrollaron paradigmas tan asombrosos como el recordado José López Rega, uno de los propiciadores del grupo terrorista Triple A; después, es necesario mencionar a la corriente sindical, clave en la estructura del movimiento y el partido fundados por Perón; y finalmente a lo que se podría denominar peronismo histórico, representado por dirigentes de extracción netamente política —distinta a la rama gremial partidaria—, que produjo uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial, primero, y a la gobernación de la provincia de Buenos Aires después, es decir, Antonio Cafiero. Curiosamente, sin embargo, el hombre que el peronismo erigió como candidato efectivo a la Casa Rosada no perteneció en forma inequívoca a ninguna de estas vertientes. Por el contrario, el secreto que encaramó como primer término de la fórmula justicialista a Italo Luder, un abogado de pensamiento conservador y figura opaca, carente de presencia ante las masas tanto como de una base propia, sin talento de orador ni carisma personal, fue justamente esa citada opacidad, y su inteligencia para sobrevalar entre las contradicciones y los choques implícitos. Luder ascendió al capitalizar el hecho de ser sólo una pieza de compromiso. No obstante, la imagen de tan desafortunado presidenciable, “una especie de querubín en un prostíbulo”, como definiera Oscar Terán su papel en una reciente carta enviada desde Buenos Aires, no explica la derrota; también hay que observar al núcleo sindical del movimiento, lo cual llevaría a un problema que puede *caratularse* como la paradoja del miguelismo. La rama gremial o sindical peronista, que constituye también el grueso de la CGT argentina, ha sido tradicionalmente orientada por la dirigencia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que agrupa al contingente de obreros industriales más poderoso del país. El heredero de ese predominio caudillesco, basado por una parte en el consenso peronista de las masas, y por otra en un sistema más o menos cerrado de selección de hombres, generaciones y grupos en las cúpulas, teniendo siempre como referente el contexto político del movimiento y el partido —como en la CTM mexicana con respecto al PRI—, es actualmente el secretario general de la UOM, Lorenzo Miguel. Podría afirmarse que nadie en el peronismo, después del mismo Perón, llegó a conseguir tanto poder político como Miguel en la reciente etapa preelectoral. Este hombre —que sufriera cárcel después del golpe de Estado del 24 de marzo— reconquistó su hegemonía en la UOM luego de doblegar a un sector disidente, se convirtió en la figura fuerte de la CGT-Brasil —fracción dura y antidictatorial de la cúpula obrera—, reanimó el viejo núcleo de agrupaciones sindicales peronistas llamado 62 Organizaciones y, como coronación de este avance, logró convertirse en el principal dirigente del propio Partido Justicialista, al ser designado vicepresidente primero del mismo, detrás de la presidencia hasta el momento formal de la señora de Perón. La clave de tal ascenso es una: desde el partido junto con Deolindo Bittel, y desde el reducto sindical junto con Saúl Ubaldini —secretario general de la



Raúl Alfonsín

CGT-Brasil—, el miguelismo se constituyó en el eje nítido de la resistencia a la dictadura y en el propiciador central de las huelgas, las movilizaciones que se organizaron en oposición al régimen militar. Su ascenso fue, pues, simétrico al repliegue de los uniformados. Cabe recordar que esta fracción del gremialismo fue la que resistió con más claridad la peor ofensiva que se haya desatado —hasta ahora— contra la dirigencia sindical peronista, cuando el poder militar no sólo intervino sus organizaciones y le quitó el control económico e institucional de las obras sociales, sino que produjo una Ley de Asociaciones Profesionales por la cual se eliminaba la existencia legal de federaciones, confederaciones y aun la misma posibilidad de que hubiera un organismo central de sindicatos. Este intento de pulverizar al movimiento obrero organizado no funcionó en la práctica, merced a una densa red de términos de identidad política y cultural de los trabajadores con el peronismo, elemento sobre el que cabalgó dicha dirección gremial para sobrevivir en tan desfavorables condiciones de oposición. Traducido todo esto, luego de la guerra de las Malvinas, se podría afirmar que nunca antes el núcleo sindical del peronismo había ganado tanto espacio en su propia estructura partidaria.

¿Por qué tan importante inversión política culminó, empero, en una derrota electoral? Las causas son complejas y difíciles de sistematizar, pero veremos de puntualizar algunas. Por una parte, es obvio que el miguelismo, pese a esta correlación de fuerzas, no tuvo un poder de arbitraje absoluto sobre la fórmula presidencial. Así, aunque en principio se vislumbró un discreto respaldo suyo a Cafiero, luego, ante la resistencia verticalista hacia esta candidatura, que presumiblemente había sido vetada por la misma señora de Perón, fue evidente que Miguel acordó con la inclusión de Luder en el primer término de la fórmula. Varios aspectos incidieron para que se resolviera ese rumbo. Sin duda en el horizonte del verticalismo, raigalmente autoritario y apegado

para su supervivencia a los hábitos de conducción delegada que desplegaba Perón, para lo cual apela a la carga simbólica que ahora se condensa en la muy discutible figura de su viuda, y a un código de transmisión de mensajes que linda entre la esoteria, la magia o la "posesión" chamánica de la palabra de los líderes, siempre muertos o a distancia de los acontecimientos, una opción como la que podía perfilarse con Cafiero no era recomendable. El citado dirigente, surgido del peronismo histórico y representando —al menos en esta oportunidad— la disponibilidad y las potencialidades políticamente más modernizadoras del partido, significó una faz antagónica al verticalismo. Es que para éste la modernización del justicialismo, su conversión en un partido de corrientes autónomas que confluyan en un juego medianamente democrático, equivale casi a la extinción. Por ello era preciso detener a Cafiero, aun cuando se sacrificara a una figura presidenciable mucho más atractiva que Luder; por entonces se pensaba, además, que tal maniobra no sería un impedimento grave para el triunfo, pues él mismo fincaría en la simple administración de una herencia política a la que se juzgaba congelada e inagotable. Era una ilusión. Nació entonces una candidatura castrada, producto neto del compromiso faccional, no de la autonomía ni de la búsqueda de un lenguaje adecuado a un análisis de la realidad, o a un proyecto concomitante. El sector hegemónico de la corriente sindical, por su parte, coincidió con esa carta mientras ganaba posiciones en el aparato partidario, y se preparaba para dirimir sus propias —y no menos aceradas— contradicciones con el verticalismo en un proceso interno de larga duración. Computando, al mismo tiempo, la desconfianza y animadversión de los verticalistas para con Miguel —a quien no le perdonarán nunca que fuera piedra angular de la caída de López Rega, en 1975—, así como el resentimiento frente al líder metalúrgico de los grupos sindicales que mantuvieron una actitud de "diálogo" o colaboración con el régimen militar, más el tradicional odio de la minoritaria izquierda peronista hacia el poder interno de la UOM —al que bautizara "patria metalúrgica"—, tendremos un arco de causas para entender por qué, en el momento máximo de su ascenso político, el 17 de octubre de 1983, trece días antes de las elecciones, el hombre fuerte del justicialismo fue sin embargo silbado, al grado de no poder hacer uso del micrófono en un gran acto masivo de la campaña, en el estadio de Vélez Sarsfield.

A este cuadro problemático aún se debe sumar el dato de que el citado dirigente, fiel intérprete del enunciado ideológico que se encuentra en el origen del peronismo como movimiento histórico: la llamada "alianza pueblo-ejército", de indudables connotaciones corporativas, en algunas de sus expresiones elogiara genéricamente al poder militar y se mostrara poco diferenciado del mismo; ello dio pie para que, no sin sagacidad, Raúl Alfonsín denunciara una confluencia o parto preelectoral entre los sindicatos y las fuerzas armadas —o los militares nacionalistas—, la cual, pese a no ser probada, dejó una estela de verosimilitud que perjudicó al peronismo frente al conjunto de la sociedad. En consecuencia, de manera impensada desde el mito de la invencibilidad electoral del partido de Perón, el auge del miguelismo, pese a sus réditos opositoristas, ya incluía paradójicamente los síntomas de sus límites, de un obligado reflujo. El justicialismo era una fuerza en estado de crisis larvaria, y el dato más espectacular de dicha situación lo constituía la candidatura de Herminio Iglesias a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Si el líder metalúrgico es el prototipo del jerar-

ca sindical producido por el peronismo: reformista tibio, nostálgico de un militarismo fuerte y de un corporativismo que cristalice la inserción de su poder en el Estado, nacionalista, autoritario sin cortapisas en el marco de sus dominios, pero al mismo tiempo pivote no sólo del sector obrero, el más compacto del peronismo, sino también de la resistencia histórica a todas las operaciones políticas que, desde 1955, han intentado gobernar en Argentina eliminando a la ancha franja nacional, popular y antiimperialista —todo combinado como en una perversa máquina que quita el sueño a los racionalizadores, ya sean de derecha o de izquierda—, el caso de Iglesias no tiene exactamente los mismos contenidos. Se diría, en cambio, que éste representó al verticalismo en esencia: de extracción gremial pero directamente involucrado en las actividades del hampa en su distrito, ferozmente antidemocrático, antiliberal, anticomunista, haciendo gala de guardaespaldas, de su relación con bandas armadas y de violencia verbal contra los adversarios, así como de un plebeyismo cultural que con el peronismo irrumpió gozosamente en la política argentina, aunque a través de este hombre expresara antes una faz gangsteril que obrera —heredera del pasado de Barceló y Ruggerito—; gozando asimismo, como López Rega, de las simpatías de Isabel Perón, con Iglesias estalló sobre el campo preelectoral una faceta premoderna de la política que, por lo menos esta vez, pareció no tolerable para casi el conjunto del cuerpo social. Por eso, fue un contribuyente involuntario de la gran aventura radical y sirvió en bandeja las condiciones para que la UCR en la provincia de Buenos Aires, pese a competir con una candidatura juzgada débil de antemano, se impusiera incluyendo aun al distrito natal del citado dirigente, en la zona de Wilde. Los datos indican que el candidato a gobernador sacó un apreciable número de votos menos que Luder en dicha provincia, por lo cual se colige que muchos peronistas practicaron el corte de boleta y le negaron el apoyo. Es evidente entonces que desde los sucesos del 17 de octubre en Vélez Sarsfield, el electorado indeciso, computado en porcentajes de hasta el 40%, contempló en el seno del peronismo todos los rasgos a la vista que se manifestaran a partir de que falleciera Perón, en 1974, hasta la caída del gobierno de su esposa, en 1976. Es decir, una puja sin tregua entre el verticalismo y la jerarquía sindical orientada por los hombres de la UOM, la postergación del sector político y modernizador del partido, la vecindad o connivencia con bandas armadas y, sobre todo, un candidato que no demostraba capacidad para controlar ese volcán. Sobre tal vacío de poder se gestó el golpe militar y la memoria no es ociosa. ¿Si los dirigentes peronistas dicen que, como el cadáver del Cid, el general Perón va a gobernar cuando ellos triunfen, yo me pregunto: ¿quién va a resolver los arduos problemas de la Argentina? Así interrogaba —en términos aproximados— Alfonsín sobre sus tribunas de la campaña electoral, en Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Y los interpelados no tenían respuesta.

Varios elementos se asocian, mientras tanto, para observar de cerca el crecimiento sin precedentes del alfonsinismo. En primer lugar, hay que apuntar la determinación de Raúl Alfonsín para construir una iniciativa política sostenida, la cual lo condujo primero al liderazgo interior en la Unión Cívica Radical, y después a disputar con éxito ante su temible oponente en el terreno de los votos. Él fue el primer político argentino en declarar, una vez propuesta la apertura de los militares, su intención de iniciar una carrera a la presidencia. La esencia de su predominio en el seno del radicalismo no se debe buscar empero en ninguna notable novedad ideo-

lógica, pese a que su corriente interna se llame Movimiento de Renovación y Cambio, sino en la capacidad para generar un caudillismo alternativo, eje de un trasvasamiento generacional de cuadros con clara influencia de los jóvenes, una vez muerto en 1981 el caudillo que hegemonizara a este partido durante cerca de cuarenta años, Ricardo Balbín. Alfonsín, que ya dirigía desde los años 60 una oposición antibalbinista en la provincia de Buenos Aires, ante el vacío dejado por el anciano líder se lanzó a edificar pacientemente una fuerza propia nacional, ciudad por ciudad y distrito por distrito, y en los lugares donde ya existían núcleos opositores de envergadura regional propuso la alianza. La más productiva de éstas, por supuesto, se articuló con la denominada Línea Córdoba, que se pretende heredera del antiguo sabatinismo y encabezan Víctor Martínez y Eduardo Angeloz (el primero es ya vicepresidente y el segundo gobernador en su provincia). Con esa vitalidad para tejer su agrupamiento y la importancia de los sectores juveniles y universitarios para dinamizar el proceso de afiliación de la UCR, Alfonsín orientó una ofensiva arrolladora en la interna radical, basada asimismo en una irreprochable disponibilidad para negociar y respetar el espacio de sus adversarios, de modo de sumar consigo todas las fuerzas y no restar casi a nadie. Todo ello tuvo por resultado un proceso impecable, que dio a luz a las candidaturas y puso en marcha la campaña con bastante antelación con respecto al peronismo. Un segundo factor a tomar en cuenta fue que nombrado dirigente acertó con la idea fuerza, con el concepto históricamente más demandado por la sociedad argentina hoy: o sea, lo que él llamó "revalorización de la democracia". En la entrevista a Alfonsín ya citada en este

artículo, se produce un diálogo con el reportero digno de una relectura cuidadosa:

"—Algunos atribuyen esa revalorización de la democracia a un hecho conyuntural...

"—¡Cómo se equivocan! La gente —sostiene Alfonsín— está definitivamente cansada de que la mandoneen, ya sean los militares, los sindicatos o los partidos políticos. El muchacho de la fábrica ha comprendido lo que es la democracia. Antes suponía que no servía para nada. Hablaba de partidocracia, porque así le habían enseñado. Hoy sabe lo que significa perder los derechos de la democracia en los términos del pan de cada día. El propio empresario, que se paseó entre el liberalismo y el autoritarismo, ahora sabe lo que es perder el derecho a la defensa de sus intereses legítimos. Aquí, sin discusión previa, sin debate, sin conocimiento de nadie, con un solo decreto de importación se cerraron miles de fábricas. También lo sabe el intelectual. Mucho de esos sectores están ahora con nosotros, aunque no compartan totalmente nuestros criterios. Pero comprenden que la diferencia que va entre la democracia y la dictadura es, a veces, la diferencia entre la vida y la muerte".

El secreto de tal discurso fue, ante todo, tener razón histórica. Luego de un proceso político, en los años 70, ganado por las rupturas vertiginosas y la violencia, y de una dictadura militar que, de un modo u otro, agravó como nunca se hizo antes al conjunto del cuerpo social, hasta aproximarlo al borde de la disolución, de la inviabilidad como colectivo nacional, es evidente que los beneficios clásicos del Estado de derecho, como el respeto a las libertades civiles, públicas e individuales, el funcionamiento de las instituciones de de-

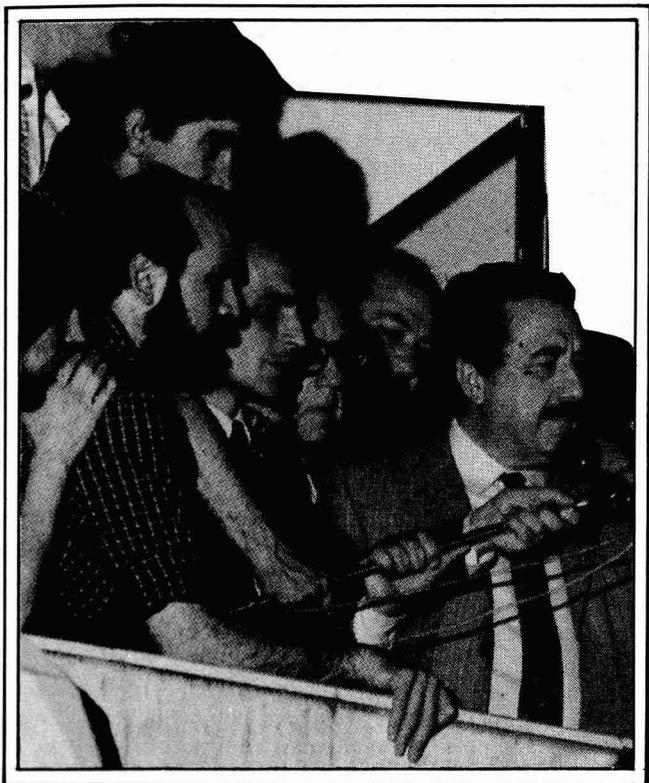


Acto radical

bate y disenso, las posibilidades de una opinión sin trabas autoritarias, ciertas garantías de paz social, o la existencia de un aparato judicial tangible y relativamente autónomo, equivalen a un suelo desde el cual dar comienzo a cualquier signo de vida. Da la impresión, así, de que núcleos sustanciales de la sociedad argentina aspiraban, antes que a otra cosa, al logro de ese suelo, que fue el claro y explícito centro del mensaje radical. Sobre esta racionalidad continuó su curso irreversible la iniciativa alfonsinista, que en el plano económico no fue más allá de los compromisos tradicionales —y en general compartidos por el peronismo—: superar la recesión, ampliar el poder de compra popular, reconstruir la planta productiva en la industria, bajar las tasas de los intereses bancarios, detener progresivamente la inflación, negociar la deuda externa sin apelar al monetarismo ortodoxo, atender las áreas estratégicas de ingerencia de la nación, reordenar un sistema económico desquiciado por la especulación financiera. Mirado desde estos puntos de vista, se diría en síntesis que el programa de la UCR tendió a colocar el acento en la cuestión principal de la Argentina contemporánea, que es política: la necesidad de recrear una legitimidad democrática y constitucional. Varios testigos del periodo preelectoral hicieron hincapié en un hecho curioso: el discurso del alfonsinismo era legible como lo “nuevo”, frente a un justicialismo que tanto en sus símbolos como por la expresión formal de sus disensiones, ponía mucho más a la vista el peso estructural del pasado; lo paradójico, sin embargo, es que aquella “novedad” está lejos de ser deslumbrantemente imaginativa o revolucionaria, y por el contrario, su profundidad depende de una aspiración tan vieja que se remonta a los orígenes mismos de la nación: abrir el paso a una legalidad civil —y civilizada— en los marcos de la Constitución liberal. Más allá de los límites que se encuentran en la letra misma de la propuesta alfonsinista, si se piensa, como sostiene Alain Rouquié, que la discontinuidad política creada en Argentina por la dialéctica de los golpes de Estado y los repliegues militares desde 1930, es decir, la ilegitimidad crónica, sirve para reproducir una situación de dominación sin hegemonía por parte de la gran burguesía importadora-exportadora de matriz rural, se colige que con el desplazamiento de dicho circuito se estará produciendo también un largo espacio estratégico que posibilite la creación cultural y política de una nueva hegemonía, democrática, popular y nacional. Y si es posible convenir, por otra parte, como afirmara José Aricó, que actualmente en América Latina la democracia tiende a ser “el mito laico que unifique a las fuerzas sociales para recomponerlas”, se percibe no sólo en el triunfo de Alfonsín, sino en todo el proceso comicial argentino, incluyendo dentro del peronismo sus contradicciones pero también las disponibilidades de reconstituirse, un comportamiento y un horizonte al que pareció aferrarse, casi como guiado por el instinto de una postrera oportunidad histórica, el conjunto del electorado. A la clave fundamental del triunfo radical y de su 52%, antes que en un proyecto o voluntad transformadora, la cual no se descubre dentro de una base social de capas burguesas en extremo descapitalizadas, ni tampoco por cierta confianza con matices populistas de Raúl Alfonsín en un “tercer movimiento histórico”, se la encuentra más bien en el contenido de centro moderado, que a veces es también centro-derecha, del voto a la UCR. Alfonsín lo conquistó porque supo proponerlo. El 40% del peronismo, empero, reitera el término de identidad política de las grandes masas obreras y de la población argentina más pobre.

II. La cuestión democrática y la cuestión nacional

Una particularidad de este proceso tiene que ver con lo que marca las diferencias entre las elecciones realizadas en Argentina en 1973, y éstas de 1983. Entonces, el repliegue militar se motivaba en una situación que descansaba sobre dos aspectos: por un lado, un auge de luchas y movilizaciones obreras y populares que arrancó en 1969; y por otro, la estructuración de un gran frente burgués nacional a partir del retorno de Perón al país, en 1972. En 1983, en cambio, el repliegue de la dictadura se basa en un fenómeno centralmente interno del frente militar: que, después de la aventura bélica en las Malvinas y el casi total descalabro causado al aparato productivo por la hegemonía del capital financiero en la política económica —a través del equipo de Martínez de Hoz—, la cohesión de las fuerzas armadas sencillamente se deshizo. En una palabra, a esta dictadura no la derribó tanto su oposición como el hecho de que su ciclo político se fue desgranando igual que un castillo de arena. Y dentro de dicha oposición se nota por ahora una ausencia: la del frente nacional burgués, cuya posibilidad de propuesta y articulación se debe centrar esta vez en el radicalismo alfonsinista. Desde un ángulo, pues, pareciera que el nuevo gobierno surge de condiciones menos nítidas que las de hace diez años. Pero simultáneamente, si en 1973 el espectro histórico se abría hacia un horizonte de cambios —un horizonte de centro izquierda y aun de rupturas más profundas—, en esta oportunidad la demanda básica es de centro: como ya vimos, la legitimación de un sistema político que borre el fantasma golpista. Por lo demás, considerando que ningún golpe de Estado se concretó en Argentina por afuera de un fenómeno de participación/consenso en el que estuvieron comprometidas franjas muy amplias de la sociedad, ahora cualquier ambición estratégica —que no sea una aventura o una maquinación al margen de las corrientes reales del país— trata de establecerse sobre otro parámetro: el gobierno de Raúl Alfonsín tiene que llegar al final de su periodo; a la permanencia irrestricta de la legitimidad constitucional deben subordinarse las restantes cuestiones, so pena de que se coloque entre paréntesis la ya frágil viabilidad de la nación misma. En este marco, el debate en relación al papel y la estructura de las fuerzas armadas resulta clave. No obstante, un planteo que adjudique la vocación golpista de éstas a las doctrinas de “seguridad nacional”, “fronteras ideológicas” o “contrainsurgencia” estará mal orientado, por que coloca al asunto sobre algo que no es precisamente el ángulo nodal: el gopismo argentino, aunque encuentra en las citadas teorías un bagaje ideológico profundamente antidemocrático y antipopular, no parte en esencia de factores externos ni de esquemas continentales, ya se elaboren en el Pentágono o en la oficina de algún otro superpoder. Las fuerzas armadas, en síntesis, no asaltan el Estado a la manera de variable particular o de estructura casi autónoma, como pueden interpretarse los golpes del general Santa Anna en México, durante el siglo pasado, sino que sus intervenciones han estado imbricadas siempre en cierto consenso con la disrupción del orden constitucional. Por eso, toda política que esté dirigida a profesionalizar y recortar la influencia de dichas instituciones será útil, mas no necesariamente fundamental. Hay, en cambio, una condición de la que es imposible escapar: que se debe estructurar un amplio y sólido acuerdo entre las principales fuerzas políticas, sobre todo el radicalismo, el peronismo y los demás partidos integrantes de la coalición que



Raúl Alfonsín, en el acto de cierre de campaña

tuviera vigencia en la etapa de oposición al régimen dictatorial, la llamada Multipartidaria, en torno a la defensa de la legalidad democrática. Esta cuestión no es una entre otras, sino que se significa como la *más importante*, un verdadero centro posibilitador del juego de la convivencia. Al respecto, se puede recordar un precedente notable: el periodo de verdadera colaboración que articularan Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, luego del triunfo electoral del primero en 1973, y que a la distancia permite ser leído hoy como una obra de delicadeza política y generosidad histórica que, muerto el primero, no fue en absoluto entendida por su viuda. Pero para que tal espíritu se reedite surgen dos requisitos: en primer lugar, la recomposición del peronismo a través de sus vertientes más autónomas y modernizadoras, lo cual no podrá ocurrir si la fracción verticalista vuelve a ocupar el medio del tablero; y en segundo término, que desde el gobierno radical no sea recreada y acentuada la vieja antinomia peronismo contra antiperonismo. En esa correspondencia de Oscar Terán que ya hemos aludido, documento que recoge una crónica analítica pero también comprometida emocionalmente con los acontecimientos, se observa que la UCR arriba a la victoria electoral integrada por “dos almas”. Una es el antiperonismo histórico, al que conocemos clásicamente antipopular, cuyos adherentes no vacilarían en proponer que al fin sea aniquilada la estructura política que montó Perón; y otra que rechaza las formas de violencia y autoritarismo que continúan reproduciéndose en la misma, pero a la vez rescata varias de sus banderas de corte nacionalista y popular. Nosotros diríamos que a ésta bien se la podría denominar la faz “socialdemócrata” del alfonsinismo. Como sea, lo que estará en el tapete durante los próximos meses será un viejo y polémico tema: la caracterización del peronismo. Con respecto a esto, es fácil encontrar un lugar común retórico que vincula al fenómeno peronista con los términos y las resoluciones que propone en Argentina la

cuestión nacional. Sin embargo, también se le deben algunos aportes históricos básicos en la conformación y avance de la cuestión democrática en la sociedad, hablando en este caso de una democracia entendida en términos mucho más amplios que los formales. Así por ejemplo, el haber logrado la integración y la participación masiva de las grandes masas obreras en la vida pública, la incorporación de las mujeres a la política, y el constituir la columna vertebral de las sucesivas derrotas y retrocesos sufridos por las más oscuras manifestaciones antipopulares, antidemocráticas y antinacionales que se cernieron sobre el país en los últimos cuarenta años, incluyendo un lugar central en la oposición a la última dictadura, son datos de un balance difíciles de postergar. En el peronismo se expresan y entrecruzan, pues, planteos y avances sustanciales de las cuestiones nacional y democrática, dentro del marco específico y contradictorio de sus rémoras corporativas y militaristas, que tampoco desaparecen nunca y le dan a este movimiento una conformación formal reacia a las academias. Negar uno y otro aspecto equivale a reducir lo real a los deseos. Una operación clave del antiperonismo, empero, tanto en su vertiente de derecha como en la de izquierda, ha sido destacar las formas ideológicas y políticas autoritarias, facistoides y frecuentemente gangsteriles de su práctica, como un absoluto, como si se tratara de su rasgo histórico fundamental, cometiendo un error de perspectiva que, si fuera predominante en la próxima administración radical, tendría consecuencias graves para el futuro de la democracia y la legitimidad constitucional. Por el contrario, a partir de la valorización que aquí se propone de su papel en la historia argentina contemporánea, y de la condición de necesidad de primer orden que adquiere la concreción de un pacto político duradero en defensa de la democracia, que formule en torno a ésta un auténtico horizonte de unidad nacional, es que pensamos que la recomposición de la maquinaria peronista constituye un requisito deseable, y no su disgregación o atomización, como es el sueño del antiperonismo vulgar. En ese sentido, a las corrientes históricas justicialistas provenientes tanto de su sector político como del sindical, así como a su ala izquierda diferenciada de Montoneros —es obvio que el terrorismo montonera, así como el lopezrreguista o el paraestatal deben ser desmontados para siempre—, corresponde esa tarea, que exige aislar los métodos y la cultura política del verticalismo para construir un partido modernizado. Esto conduce a una discusión sobre tácticas y políticas inmediatas, que no es ociosa tomando en cuenta ciertos aprestos que se vislumbran en el ámbito cercano al nuevo presidente: si en nombre de una democratización formal fuera el aparato del Estado —y no las masas en su acción autónoma— el que orientara una política agresiva sobre la estructura sindical del peronismo, es factible que se cometa un error en varias direcciones. Hipotéticamente, se ayudaría al verticalismo a destruir un enemigo interno, restando aliados necesarios para la recomposición peronista; se intentaría debilitar un factor histórico de identidad nacional y popular de las grandes masas de trabajadores; y se menguaría la capacidad negociadora de la clase obrera, condenándola a ser el posible chivo expiatorio de la crisis.

De acuerdo a los planteamientos que como candidato hizo Raúl Alfonsín y a inequívocos indicios posteriores al triunfo electoral, resulta previsible que en el campo sindical se desplegará una importante batalla política de profunda trascendencia para todo el panorama social argentino durante un plazo bastante prolongado. En efecto, el tema de la de-

mocratización sindical resulta ahora reflotado en el cuerpo de propuestas del radicalismo luego de haber sido el sujeto —por cierto que con características bastante diferenciadas— de una larga tradición de lucha de la clase obrera argentina, tradición intensificada en el período abierto por el *Cordobazo* en 1969, y proseguida en experiencias altamente significativas al menos hasta 1974. El problema ha sido base para la reflexión y la acción política de la izquierda socialista y también, en buena medida, de importantes sectores avanzados del peronismo y, ciertamente, resulta complejo y encierra una gran cantidad de elementos contradictorios tras la apariencia simple y directa que evoca su enunciación.

El destinatario inmediato de un proceso de democratización de la vida sindical resulta obviamente la cúpula justicialista, representada paradigmáticamente en la dirección de la Unión Obrera Metalúrgica. A partir del hecho innegable de que el aparato sindical ha sido uno de los fundamentos de la vertebración del peronismo desde la constitución histórica de este movimiento y una fuerza de singular gravitación en sus pugnas internas, en una elemental lógica de análisis la propuesta radical de democratización no puede adjudicarse —al menos exclusivamente— a una genérica pasión regeneradora derivada de su proyecto de país y de sus presupuestos ideológicos, sino que se carga de resonancias de coyuntura política, tal como se manifestara además cristalinamente en reiteradas argumentaciones de Alfonsín. Un golpe exitoso aplicado a las máximas instancias de dirección del movimiento obrero tendría fuertes consecuencias sobre toda la estructura peronista y su correlación interna de fuerzas, beneficiando —al menos en lo inmediato— a los sectores verticalistas de obediencia inmediata a la viuda de Perón, pero generando además modificaciones bastante imprevisibles en toda la estructura de poder de Argentina, tal como se articuló desde hace cuatro décadas y más particularmente después de una anterior “democratización” sindical efectuada en el año 1957 a instancias del ordenamiento promovido por la “Revolución Libertadora” que derrocó a Perón en 1955, y las correcciones introducidas en el régimen legal de los sindicatos por el gobierno de Arturo Frondizi, cumpliendo exigencias de su aliado peronista en las elecciones de 1958.

El elemento de fondo que probablemente resultaría afectado sería el de la *centralidad* de la clase obrera en el sistema de poder del país, adquirida fundamentalmente por medio del peso decisivo del aparato sindical en el esquema peronista, y a través del papel desempeñado en la resistencia a los proyectos de hegemonía oligárquica tal como se expresaran sucesivamente en 1955-58, 1966-73 y 1976-83. Esta centralidad se instrumentó mediante la enorme capacidad contractualista de los sindicatos por una parte, y la hábil utilización de esa capacidad para aumentar en forma consistente su peso político dentro del movimiento peronista y correlativamente dentro del conjunto de la sociedad. Este logro inequívoco de la cúpula sindical justicialista, que fue naturalmente su principal beneficiaria, tuvo su contrapartida en la rígida estructuración de un tipo de organización sindical fuertemente piramidal, sujeta a un crudo autoritarismo organizativo e ideológico que se expresó frecuentemente en formas abiertamente gangsterilesy que ha teñido, en términos generales, la vida sindical argentina de contenidos antidemocráticos, tanto en el modelo organizativo como en el estilo de dirección y en la forma de participación y movilización de las masas obreras.

Este último hecho ha llevado a considerar, justamente, que no existe en la Argentina una posibilidad de salida de-

mocrática perdurable sin una renovación profunda de la vida sindical en el sentido marcado precisamente por una democratización de sus estructuras, lo que conlleva necesariamente una redefinición de su naturaleza y objetivos.

Sin embargo, y como ya señalábamos, la cuestión ofrece matices que debemos analizar con mayor profundidad. En primer lugar, y este es un debate profusamente abordado desde la derecha argentina e instrumentado fallidamente al menos por la dictadura militar de Videla y Viola, pero también discutido desde ciertas postulaciones de izquierda socialista —natural y obviamente desde ángulos distintos, y no pretendemos recrear los nefastos vicios del análisis de “coincidencias objetivas”—, la esencia misma del sistema sindical argentino es cuestionada y quizás podría serlo también en el próximo debate que se abrirá inmediateamente. El sindicato único por rama de producción y la existencia de una central única de trabajadores, además del control por parte de las organizaciones sindicales de los fondos de la obra social, es una conquista histórica de los trabajadores argentinos y resultó un poderoso instrumento para esa centralidad obrera a la que ya nos referimos, al acentuar su poder contractualista en el terreno económico-salarial, y de hecho, por esta vía, su peso político y social. No resulta correcto que el paralelismo sindical, es decir la destrucción del sindicato y la central única y su reemplazo por estructuras sindicales competitivas entre sí, redunde en beneficio ni coyuntural ni a largo plazo, histórico, de la clase obrera argentina, y en este sentido se debe contabilizar además que el logro del sindicato único por rama de industria y la central única no fue una concesión graciosa de las patronales y el Estado sino una conquista largamente perseguida por los obreros, que constituye de por sí una valiosa tradición.

Por el contrario, es dentro de las estructuras organizativas existentes, sindicato único por rama de producción, federaciones, uniones y Confederación General del Trabajo, donde se debe resolver el problema de la democratización, con una nueva concepción pluralista de la lucha interna y el debate de líneas y agrupaciones en la organización interna sindical. Este proceso exige generarse en un auténtico juego autónomo desde el interior mismo de las organizaciones obreras, en el que cumplan un papel protagónico, totalmente revalorizado, instancias organizativas decisivas del nucleamiento de los trabajadores, tales como las comisiones internas de las grandes empresas y los cuerpos de delegados sindicales, auténticos foros de deliberación y ámbitos de decisión de las bases obreras, que jugaron por otra parte papeles recordables en los profundos procesos de democratización caracterizados por el *clasismo* en la década pasada. El sólido y respetable principio socialista de que la organización de los trabajadores es asunto de los trabajadores mismos y no del Estado —principio frecuentemente olvidado, pero esencial en un real y efectivo proceso de democratización de las instancias organizativas sindicales— resulta la única garantía eficaz para que un viejo jerarca burocrático no sea reemplazado por uno nuevo, cualquiera sea el signo político que eventualmente lo caracterice.

De hecho, dos concepciones distintas se van a enfrentar en torno al tema ya planteado de la democratización sindical. La primera, aquella que la entiende en un sentido instrumental, concebida desde el Estado dirigido por una fuerza no peronista para aprovechar las especiales circunstancias de la derrota electoral y la crisis del peronismo, así como el grado de responsabilidad de la cúpula sindical justicialista en esa derrota, para lograr una doble finalidad. Primera, y

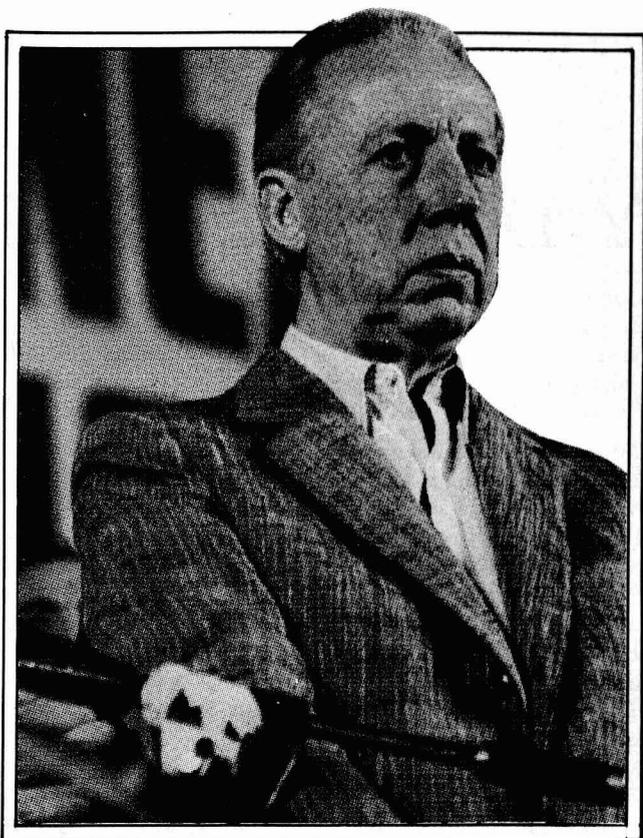
coyuntural, destruir o aplicar un golpe muy fuerte al principal aparato conformador del peronismo y una de sus fuentes fundamentales de sustentación; segunda y más estratégica, desarticular un punto de identidad *política*, no solamente corporativa, de la clase obrera argentina, y de paso debilitar también su capacidad contractualista y negociadora a mediano y largo plazo como una base necesaria para la recomposición y el avance del capitalismo, duramente quebrantado en este último periodo. Esta perspectiva aparece en parte en la versión que del problema sindical dio el candidato presidencial radical, quién subrayó la necesidad del *apartidismo*, —con referencias claras al *apoliticismo*— de la organización sindical argentina, lo que denota una visión absolutamente formal y dentro de los rígidos cánones del pensamiento liberal en torno a la cuestión, y que en buena medida caracterizaría la posible ofensiva estatal en este terreno.

La otra concepción de la democratización sindical es aquella que mantiene la idea del sindicato como un punto de referencia sustantivo, no el único y quizás en un futuro ni siquiera el más importante, de la identidad de la clase obrera, a la vez que un poderoso instrumento contractual y de gran influencia social renovadora. Dicho concepto de la democratización sindical que ponga en jaque a la jerarquía justicialista demanda fundarse en la participación profunda de los trabajadores, en poderosos movimientos de masas que superen los límites formales en que seguramente querrá encasillarla el Estado, pero que además estará vinculada a fuertes movimientos reivindicativos que necesariamente resultarán contradictorios con la estrategia gubernamental en materia económica, y sin duda con la real situación y capacidad económica y financiera del país.

Resulta obvio que el momento es complicado para una estrategia de democratización como la esbozada en segundo término, especialmente dada la posición defensiva en que ha confinado a la clase obrera la tremenda crisis económica y la desarticulación del aparato productivo, con su secuela de desempleo y de perspectivas amenazadoras para las más mínimas necesidades de la sobrevivencia, y la profunda crisis política y de dirección a partir del revés justicialista. Un traslado mecánico de la cuestión democratizadora general de la sociedad a la de los sindicatos, no comprende las particularidades coyunturales y las necesidades de recomposición de éstos y su dinámica en el propio movimiento obrero, por lo cual corre el riesgo de favorecer un proceso mayor de debilitamiento para los trabajadores argentinos.

III. Epílogo

Así, en el marco de una herencia económica de hiperinflación, recesión, enorme deuda externa, especulación sin freno, y de múltiples demandas sociales que abarcan a todos los sectores y grupos, la democracia argentina, como ya hemos visto en algunos temas, estará rodeada de dilemas y cornisas. El alfonsinismo ha demostrado vocación de gobierno, iniciativa política y un discurso democratizador y civilista, pero falta saber si, además de capacidad ejecutiva, posee grandeza histórica. Sin ésta en una dosis semejante a la desplegada por los viejos líderes Perón y Balbín en 1973, será tal vez imposible consolidar a la nueva legalidad. El peronismo, a su vez, afronta la nada simple tarea de su recomposición. Y la sociedad en general, que por medio de su prensa y opinión pública —donde siempre han sido distintivas las capas medias urbanas— ha evidenciado una permeabilidad asombrosa al consumo de mensajes ideológicos, a veces frívolos y



Italo Luder, candidato peronista

otras veces siniestros, tendrá que probar que el actual auge de la democracia no es un acto más de consumo. Dicha prensa y corrientes de opinión han pasado en los últimos años, miméticamente, de la consagración del camporismo al consenso silencioso con la masacre perpetrada por los militares; de la celebración patrioter de una victoria deportiva amañada por el régimen, como el mundial de futbol de 1978 —auténtica fiesta en un cementerio—, al vitoreo socialchovinista de la ocupación de las Malvinas, máximo *show*, además, del oportunismo político por parte de casi todos los partidos, corresponsables efectivos de la guerra con Gran Bretaña; y del desengaño con el orden autoritario de la dictadura a fuertes expectativas de “destape” y participación democrática.

Frente a esos vaivenes hay que preguntarse con inquietud: ¿cuáles son los valores, los reales núcleos de integración de dicha opinión pública?, ¿existen ellos o han sido aplastados por el terror?, ¿cuál es el espejo último: Galtieri o Alfonsín, los desaparecidos o Menotti, o tal vez un *collage* de todos? Hasta ahora ha predominado una operación semántica de desplazamientos y yuxtaposición formal, como si los medios masivos y la conciencia colectiva creyeran que la sustancia histórica no tiene textura ni fuese responsabilidad de nadie; como si el esperpento perteneciera más bien a un exterior imaginario que a una esencia propia de la sociedad en que vivimos los argentinos. Parece imprescindible, también, practicar entonces un encuentro crítico y responsable con ese esperpento que es nuestro pasado, y su memoria moral y política, e integrar todas las caras en el espejo, cada una en su sitio. Una generación tendrá por delante ese trabajo, si se sabe no “ser víctima, al mismo tiempo, de la ecuación peligrosa del desencanto y la resignación”.

México, D. F., 3 de diciembre de 1983.